



Representantes parlamentarios y científicos, durante una reunión para abordar la creación de un grupo asesor. / VERÓNICA POVEDANO

Un grupo de investigadores consigue que el Congreso se plantee crear una oficina de asesores científicos como la que tienen muchos Parlamentos europeos

Leyes con ciencia

NUÑO DOMÍNGUEZ, Madrid
 España es una rareza en Europa por la ausencia de una oficina de asesores científicos en el Parlamento, pero ya ha dado los pasos para solventar esta deficiencia. Los grupos políticos están dispuestos a crearla.

La red europea de estas oficinas, EPTA, tiene 22 miembros, tanto de Parlamentos nacionales de Alemania, Francia, Reino Unido, Grecia, Finlandia o Suecia, entre otros, como de regiones —Valonia y Cataluña— y países asociados como Rusia, EE UU, Chile, México o Japón.

“Los políticos, como el resto de los humanos, no toman decisiones basados solo en hechos, sino también en sentimientos y creencias. Nuestra tarea es ayudarles a tomar esas decisiones con información científica imparcial y relevante sobre cualquier asunto”, explica Theo Karapiperis, jefe del Panel de Evaluación de Opciones Científicas y Tecnológicas del Parlamento Europeo (STOA), organismo que ostenta la presidencia de EPTA en 2018.

En el STOA trabajan 12 personas, ocho de ellos científicos, y su presupuesto anual es de 650.000 euros, señala Karapiperis. Realiza estudios prospectivos de temas que impactarán a la sociedad en el medio plazo y pueden quedar olvidados por los legisladores y su ciclo político de cuatro o cinco años. En 2016, el servicio publicó un estudio sobre la responsabilidad legal de vehículos autónomos y otros robots que contribuyó a que el Parlamento Europeo fuese el primero en legislar este tema.

Uno de los ejemplos paradigmáticos en los que la asesoría científica resultó importante fue el de los bebés con tres padres. El Parlamento británico fue uno de los primeros del mundo en aprobar esta técnica de reproducción asistida. “Sabíamos que este asunto iba a llegar algún día al Parlamento así que empezamos a trabajar en el tema con dos años de antelación”, explica Chris Tyler, director de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología (POST) entre 2012 y 2017. “Este era un asunto con una importan-

te carga de detalles científicos que había que entender para poner en contexto los argumentos de algunos grupos. Por ejemplo, la Iglesia Católica se opuso a esta técnica porque decía que no es segura, pero nuestro informe citaba que la tasa de fallos es baja y, a cambio, permite eliminar el 100% de las enfermedades mitocondriales que, de lo contrario, las madres transmiten a sus hijos. Todo esto ayudó a que hubiese un debate de mucho nivel y finalmente el Parlamento aprobó la transferencia mitocondrial”, recuerda Tyler. “En ausencia de este tipo de asesoría es muy fácil hacer afirmaciones infundadas y, si nadie lo vigila, el resultado es un debate parlamentario de baja calidad. Lo que hacen este tipo de servicios es asegurarle al ciudadano que sus impuestos generan un trabajo parlamentario de calidad. Lo único que puede hacer daño a la democracia es usar datos incorrectos o falsos”, asevera.

El producto estrella de POST son documentos de cuatro páginas que reúnen toda la informa-

El asesoramiento es útil en asuntos como salud, energía o infraestructuras

Es fundamental que la información sea imparcial y no entre en política

ción fiable sobre un tema concreto. Los elaboran estudiantes de doctorado durante una estancia de tres meses en la oficina parlamentaria. Para cada documento realizan unas 30 entrevistas con expertos que después revisan unos 20 académicos y expertos del Gobierno y el mundo empresarial. Es fundamental que la información sea imparcial y no entre en política. “Esto nos ha permitido ganar la confianza de los parla-

mentarios pero un solo con un error podemos perderla”, dice el exdirector de POST.

Actualmente Tyler trabaja en el University College de Londres investigando el impacto real de este tipo de servicios, que es difícil de medir. “Si podemos decir que hemos tenido decenas de miles de interacciones entre políticos y científicos, por ejemplo en desayunos informales sobre temas específicos en los que los parlamentarios no sienten vergüenza de hacer preguntas tontas y, aunque es difícil de demostrar, creemos que tiene un gran impacto”, señala.

Este año, un grupo de 20 científicos ha lanzado la campaña Ciencia en el Parlamento para realizar encuentros entre científicos y diputados similar a la que ya se hace en el Parlamento Europeo. El proyecto fue muy bien recibido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en enero y el mes siguiente por la Mesa, en la que están representados todos los grupos políticos. Ya se ha aprobado celebrar dos días de ciencia en el Parlamento y ayudas económicas puntuales de la Fundación Cotec y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La iniciativa ha recibido el apoyo de más de 3.000 personas y 160 instituciones, explica Andreu Climent, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y uno de los promotores de la iniciativa.

“Nuestro primer objetivo es realizar reuniones periódicas entre científicos y políticos no para hablar de presupuestos ni política científica, sino de cómo la ciencia puede ser útil en diversos asuntos, desde la gestión de carreteras a la salud, la energía...”, explica Climent.

La propuesta incluye estudiar la creación de un sistema permanente de asesoría científica en el Parlamento y, para ello, está previsto que Tyler acuda a la Cámara. “No se trata de copiar el modelo de Reino Unido, sino de entender cómo funciona su trabajo, pensar cómo los científicos podríamos ser de utilidad y que sean los parlamentarios los que decidan. Cuando lo propusimos, los miembros de la Mesa del Parlamento estuvieron de acuerdo en crear una oficina u otro sistema de asesoramiento científico permanente”, comenta.